

Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos séptimo a décimo tercero, los que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que comparece doña Alejandra Andrea Contreras Ramírez e interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, alegando vulneración a su garantía constitucional contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que es funcionaria del Juzgado de Garantía de Calama, jefa de hogar y madre soltera de un hijo de 8 años de edad, y que se encuentra en el proceso de titulación de la carrera de Derecho. Con el fin de terminar su proceso académico y teniendo en cuenta las complicaciones propias de sus circunstancias y de la pandemia que afecta al país, se comunicó en enero del año 2021 con el Director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Antofagasta, a fin de solicitar la realización de la práctica profesional en la Defensoría Penal Pública de la ciudad donde vive, contando con autorización del tribunal donde labora y de quien estaría a su cargo en la Defensoría. Tras varias comunicaciones, el Director de la Corporación Regional otorga la autorización vía "Whatsapp",



por lo que procede a realizar su práctica profesional el día 7 de junio del año 2021. Hace presente que desde la Defensoría se comunicaron vía telefónica con la recurrida en al menos dos oportunidades, para consultar por modalidades especiales en tiempos de pandemia, y si era necesario completar alguna clase de formulario, sin que se haya mencionado, por parte de la Corporación de Asistencia Judicial, problema alguno.

Pese a lo narrado, señala, faltando seis días para su finalización, la recurrida por medio de su director, don Giancarlo Fontana, desconoce saber que se encontraba realizando su práctica profesional, todas las comunicaciones y autorizaciones otorgadas, y ordena la suspensión de la misma, bajo el fundamento de que mientras no exista una resolución formal, ésta no puede siquiera iniciar.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional y que por su medio se restablezca el imperio del derecho, ordenándose a la recurrida la dictación de la Resolución Exenta, con efecto retroactivo conforme lo prescrito en el artículo 52 de la ley 19.880, autorizando su práctica profesional, y se disponga asimismo su reincorporación a la misma por los seis días pendientes, con costas.

Segundo: Que don Giancarlo Fontana Adasme compareció informando en representación de la Corporación de



Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, señalando que de acuerdo con el Reglamento de Práctica Profesional de Postulantes al Título de Abogado, la práctica profesional comienza con la solicitud del egresado de derecho y con la dictación de una Resolución de Inicio de práctica profesional emitido por el Director Regional que individualiza al postulante, la unidad o servicio en que la práctica profesional se llevará a cabo y el tiempo de duración de dicha práctica.

Sobre este caso en particular, manifiesta que a la actora se le comunicó en varias oportunidades el conducto regular para la realización de la práctica profesional, pero que ella optó por prescindir de él, solicitando por medio de comunicaciones directas vía telefónica y por correo electrónico, un horario, lugar de trabajo y cupo que no se encontraban habilitados. Explica que cuando se le dijo "está autorizado", se refería a que estaba autorizado el cupo para que un postulante realizara la práctica profesional en la Defensoría Penal Pública de Calama, requisito previo para solicitar la práctica profesional allí, y no que su práctica profesional estuviese autorizada, siendo siempre indispensable que la recurrente continuara el procedimiento de inscripción que ella conocía.

Considera que no existe ningún derecho constitucional conculcado, ya que la recurrente actuó fuera de lo que la



autorizaba el ordenamiento jurídico, enmarcándose la conducta de la Corporación de Asistencia Judicial dentro de los estándares de calidad y probidad de la gestión Pública a los que está obligada, solicitando así el rechazo del recurso.

En un informe posterior, reitera que para sus registros, la supuesta práctica profesional cursada no existe, ya que no existe documentación o resolución alguna que dé cuenta de ella, sin que se haya cumplido ninguna formalidad para su inicio.

Tercero: Que don Hernán Sergio Díaz Verdugo, Defensor Penal Público, Jefe de la Defensoría Local de Calama, evacuó el informe solicitado sobre el asunto discutido en autos.

Declara, en lo pertinente, que la recurrida envió su solicitud de realización de práctica profesional en la Defensoría Penal Pública de Calama al Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial -con copia a la Defensoría-, quien le respondió que para dar curso a la solicitud de postulante, la institución debía presentar una petición de apertura de cupo, indicando carga de trabajo. Ante esa respuesta, continúa, remitió un correo electrónico a la Dirección Regional de la Corporación con lo solicitado, pidiendo al mismo tiempo autorización al Defensor Regional de Antofagasta para la realización de la práctica profesional en sus oficinas.



Posteriormente, la recurrente se presentó en sus oficinas, exhibiendo mensajes de Whatsapp en los que el Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial manifestaba que la práctica estaba autorizada, por lo que decidió comunicarse por vía telefónica con él, consultando por la modalidad de realización de la práctica profesional de la actora. Detalla las funciones cumplidas por la postulante, narrando que transcurridos unos meses, se comunicó nuevamente con el Director Regional de la recurrida para que le informara sobre la existencia de algún registro oficial de práctica donde consignar las actividades ejecutadas. Se le respondió, señala, que si bien existía un registro tipo, atendida las actuales circunstancias de pandemia lo importante es que las actividades realizadas por la recurrente fueran consolidadas en un informe que se fuera elaborando de manera precisa.

Finaliza diciendo que, tras una tercera comunicación telefónica con el Director Regional, el día 17 de noviembre de año 2021 recibe un correo electrónico del mismo funcionario, en el aquel dice haber tomado conocimiento según "los dichos" de la actora, que ella se encontraba realizando la práctica profesional en la Defensoría, y que por no estar registrada esta información ni haberse dictado la resolución correspondiente, no se le reconocería el período transcurrido.



Cuarto: Que, igualmente, don Alex Ponce Villalobos, Administrador del Juzgado de Garantía de Calama evacuó informe, adjuntando un certificado emitido por el Jefe de Unidad de Sala de dicho tribunal, quien recibió en calidad de Administrador subrogante un correo electrónico de fecha tres de junio del 2021, en donde la actora informa el inicio de su práctica profesional en la Defensoría Penal Pública de Calama.

Quinto: Que, de los antecedentes aportados y lo informado en autos, se puede tener por acreditado lo siguiente:

1) Con fecha 8 de enero del año 2021, la recurrente envió un correo electrónico al Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, con copia a la secretaria de dicha institución, encargada del proceso administrativo de las prácticas profesionales, y al Jefe de la Defensoría Penal Pública de la ciudad de Calama, solicitando la realización de su práctica profesional.

2) Los días 19 y 25 de enero del mismo año, la actora remite correos electrónicos solicitando alguna respuesta.

3) El 29 de enero de 2021, don Giancarlo Fontana contesta el correo electrónico, con copia a la Defensoría, manifestando "la necesidad que desde la Defensoría se



solicite la apertura del cupo y la carga de trabajo que se estima realizará durante los seis meses que dura esta”.

4) En respuesta a dicho correo, don Hernán Díaz, Jefe de la Defensoría Penal Pública de Calama, remite la información solicitada, lo que no está controvertido en autos.

5) Entre abril y mayo de 2021, la recurrente envía “Whatsapp” a don Giancarlo Fontana, preguntando si se ha visto el correo de don Hernán Díaz. El día 25 de mayo de aquel año, se lee que la actora escribe “Yo hablé con usted unos meses atrás para la práctica en la Defensoría Penal Pública en Calama- Don Hernán ya le mandó correo. Habrá alguna respuesta de aquello?”, respondiéndose a estos mensajes: “Hola. Si estamos. Ok. Está autorizado.”

6) Con fecha 7 de junio de 2021, la Defensoría Penal Pública da inicio a la práctica profesional, enviando un correo electrónico a los trabajadores de la institución presentando a la postulante.

7) El día 17 de noviembre del año 2021, el señor Giancarlo Fontana escribe al señor Hernán Díaz a propósito de la recurrente, indicando que ella no envió la documentación necesaria para efectos de dictar la resolución requerida para dar inicio a la práctica.

8) Este correo es respondido por el Defensor Penal Público Jefe de Calama el mismo día, manifestando su preocupación por la situación, considerando los correos



electrónicos intercambiados y las comunicaciones telefónicas sostenidas entre ambas jefaturas sobre la postulante.

9) Finalmente, el día 29 de noviembre de 2021, por medio de un oficio remitido al Defensor Local Jefe de Calama, don Giancarlo Fontana solicita que la actora no continúe cumpliendo funciones en sus dependencias, y evacuar un informe completo sobre los hechos acontecidos.

Sexto: Que, de esta forma, la controversia se funda en que la Corporación de Asistencia Judicial recurrida niega que las labores realizadas por la actora en la Defensoría Penal Pública de la ciudad de Calama puedan ser consideradas práctica profesional en los términos del artículos 523 N°5 del Código Orgánico de Tribunales, ya que para que ésta se constituya como tal, el interesado debe presentar una solicitud de práctica profesional acreditando su calidad de egresado de derecho, y, luego, verificándose los requisitos, el Director Regional dicta una Resolución de inicio de práctica profesional, individualizando al postulante, la unidad o servicio donde se llevará a cabo y el tiempo de duración de dicha práctica, cuestiones que la recurrente, no habría cumplido.

Séptimo: Que, de acuerdo con el número 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, para obtener el título de abogado se requiere, entre otros, "5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por



seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la ley N° 17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública. Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que deban cumplirse para que dicha práctica sea aprobada."

El reglamento que cita la norma legal, es el creado por el Decreto N°265 de 1985 del Ministerio de Justicia, Reglamento de Práctica Profesional de Postulantes al título de Abogado. Aquel señala en su artículo 2 que, "Para proceder a su práctica forense cada postulante deberá:

1°.- Acreditar, por medio de un certificado expedido por el representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales o del organismo equivalente de alguna Universidad reconocida por el Estado, que el postulante ha rendido satisfactoriamente los exámenes cuya aprobación es necesaria para adquirir la calidad de egresado de derecho,

y 2°.- Inscribirse en un Registro que para tal efecto será llevado por un funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial respectiva. En este Registro se anotarán los nombres y apellidos del candidato; su edad; domicilio; Universidad y Escuela en que hizo sus estudios; el cumplimiento del requisito a que se refiere el número 1° y la fecha de ingreso al Consultorio. Asimismo, se agregará



al Registro una fotografía tamaño carnet del postulante; también se dejará constancia de las medidas disciplinarias que pueden adoptarse a su respecto y si la práctica ha sido aprobada o reprobada. La inscripción será firmada por el funcionario de la Corporación y el interesado". En síntesis, indica que el interesado deberá acreditar su calidad de egresado, y ser inscrito en un registro con sus datos personales y fotografía, el que será firmado por un funcionario de la Corporación y el postulante. Este registro, debe decirse, no es inmutable, ya que la misma norma contempla que en él se dejará constancia de las medidas disciplinarias que apliquen al postulante, y si este aprobó o no la práctica profesional.

Octavo: Que, junto con los artículos citados, el servicio ha establecido un procedimiento con el fin de ordenar y administrar adecuadamente el ingreso de postulantes, según se señaló por la propia recurrida.

Este procedimiento se encuentra publicado en la página institucional, que corresponde a "<https://www.cajta.cl/nosotros/postulantes>". Revisada aquella, aparece en el acápite "Proceso de Inscripción de Práctica Profesional", que los postulantes deben solicitar su inscripción en la respectiva Dirección Regional correspondiente a la Región donde deseen desarrollar su práctica profesional, y además deberán acompañar como antecedentes: 1) carta al Director Regional solicitando



realizar su práctica profesional, permitiéndose la descarga de una carta "modelo" donde se debe señalar si el postulante rindió o no su examen de grado, exponer brevemente su experiencia laboral, motivación y expectativas para la práctica, y señalar, si es funcionario público, el compromiso y autorización de su empleador para ejecutarla en un determinado horario; 2) Certificado de Egreso, 3) Dos fotos de tamaño carnet con RUT, 4) Fotocopia de cédula de identidad autorizada ante notario, 5) Tener activa la Clave única del Servicio de Registro Civil e Identificación y dominar los manuales de usuario al efecto, y una declaración jurada relativa a ser parte de grupos de riesgo Covid-19. Estos requisitos establecidos en la página web, aparecieron ante su consulta, mas no aparecen fundados en la normativa que fuera citada o alguna otra.

Noveno: Que, a la fecha en la que la recurrente compareció por primera vez ante la recurrida a fin de solicitar su práctica profesional, estaba vigente la Resolución Exenta N°477/2020 de 18 de mayo de 2020 de la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, que establece "un proceso extraordinario de inscripción y de desarrollo de las prácticas profesionales de los/as futuros/as postulantes al título de abogado/a de esta Corporación, a consecuencia del brote de Coronavirus (COVID-19)", disponiendo, entre otros, que la práctica profesional se desarrollará preferentemente



de modo remoto, por medios electrónicos y/o vía presencial, según se implementen en el futuro medidas de retorno a las labores en las dependencias físicas de las unidades a que sean destinados.

Posteriormente, con fecha 8 de abril del año 2021, la recurrida dictó la Resolución Exenta N° 315/2021, que mantiene "la modalidad de desarrollo de práctica profesional de los postulantes al título de Abogado/a de esta Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Tarapacá y Antofagasta y las instituciones en Convenio, conforme a los lineamientos entregados a través de la resolución exenta N°477/2021, del 18 de mayo de 2020, priorizándose su desarrollo bajo modalidad remota o no presencial, sin perjuicio de las gestiones judiciales o extrajudiciales que, en el cumplimiento de la práctica, deban realizarse presencialmente, ello con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por la Autoridad".

Décimo: Que, de esta forma, analizando los hechos de la causa en relación a la normativa aplicable que fuera reseñada en los considerandos anteriores, resulta que la recurrente efectuó una solicitud de práctica profesional ante el funcionario investido para recibirla, enviando una petición a su correo electrónico institucional, quien al responderle por ese mismo medio, únicamente le manifestó la necesidad de que la Defensoría Penal Pública "solicite la



apertura del cupo y la carga de trabajo que se estima realizará durante los seis meses que dure esta". Enviada esta información por el Jefe de la Defensoría Penal Pública de Calama, la recurrente solicita alguna respuesta por la aplicación de comunicación remota, Whatsapp, a lo que el mismo funcionario responde, ante la consulta genérica sobre su postulación, que estaba autorizado.

De esta forma, se concluye que las respuestas otorgadas por el Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial, conforme con lo dispuesto en los artículos 3 y 18 de la Ley N° 19.880, constituyen actos administrativos particulares, de contenido favorable a la gobernada, al manifestar el funcionario competente una decisión frente a una consulta de un particular, por los medios idóneos para ello, especialmente teniendo en cuenta la situación de pandemia, recayendo sobre la administración la obligación de que sus resoluciones sean lo suficientemente claras y transparentes para sus destinatarios.

Décimo primero: Que, en este punto, debe descartarse la alegación de la recurrida de que su autorización se limitaba meramente al cupo para que una persona postulara a cumplir con su práctica profesional en la Defensoría Penal Pública en Calama en abstracto y no para la recurrente, ya que, según se leen en los documentos acompañados y como fuera dicho por el Jefe de la Defensoría Local de Calama,



don Hernán Díaz, siempre se planteó la solicitud en relación a la propia recurrente, involucrando las comunicaciones intercambiadas a sólo tres actores: la interesada, la Corporación y la Defensoría.

Adicionalmente, el referido Jefe de la Defensoría Penal Pública declaró en su informe el haber llamado telefónicamente a la Corporación de Asistencia Judicial con el fin de coordinar diversos aspectos administrativos de la práctica de la recurrente tan pronto tuvo noticias de la autorización, y también, haberse comunicado por el mismo medio algunos meses después, perdiendo plausibilidad la hipótesis de desconocimiento, un error o malentendido.

Décimo segundo: Que, establecido el hecho de que don Giancarlo Fontana autorizó la práctica profesional de la postulante en la Defensoría Penal Pública de Calama, resulta que, de acuerdo con el principio de la protección de la confianza legítima, las actuaciones de los poderes públicos producen la confianza entre los destinatarios de sus decisiones, generando una legítima expectativa en él de su mantención.

El que el Director Regional de Antofagasta de la Corporación de Asistencia Judicial señale, a casi seis meses de iniciada la práctica profesional, desconocer las respuestas que él mismo dio a la recurrente y al jefe de otra repartición pública, constituye un comportamiento contra los actos propios que causa un perjuicio directo



sobre la interesada al suspender la realización de su práctica profesional faltando seis días para que aquella finalizara.

Décimo tercero: Que, la decisión de la recurrida de no reconocer el tiempo de ejecutada la práctica de la recurrente corresponde, en los hechos, a una verdadera extinción de oficio de sus propios actos. Esta extinción, cuando es provocada por la misma autoridad, puede ser por medio de la invalidación o de la revocación.

La invalidación, definida en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, permite a la administración invalidar los actos contrarios a derecho, siempre y cuando se cumpla con dar audiencia previa al interesado, y dentro de los dos años siguientes a la notificación o publicación de aquellos. En este caso, si bien estaría dentro de plazo, no se cumple el requisito de audiencia previa, siendo imposible su ejecución.

Sobre la revocación, constituye una revisión de oficio de la Administración y, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley N°19.880, no procederá cuando, entre otros, se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente, como el caso de marras, razón por la cual, tampoco es procedente, y no existe, entonces, fundamento legal para el actuar denunciado.

Décimo cuarto: Que, por lo demás, la determinación adoptada es igualmente arbitraria al ser desproporcionada,



ya que implica la pérdida de casi seis meses de trabajo no remunerado realizado de buena fe, involucrando no sólo a la recurrente sino también a la Defensoría Penal Pública y a los servicios que ella presta. Dadas las falencias detectadas por la Corporación, se pudo adoptar como decisión pedir la concreción de las formalidades faltantes y el envío de los documentos requeridos, u otra decisión análoga que no generase tan gravosos efectos para la postulante.

Décimo quinto: Que, de la manera en que se reflexiona, la actuación de la recurrida que ha sido denunciada vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, en cuanto se ha dado a la actora un trato distinto de aquel que se ha entregado a otras personas que se han encontrado en una situación análoga, circunstancia suficiente para acoger el recurso de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, **se revoca** la sentencia apelada de siete de marzo de dos mil veintidós y, en su lugar, **se acoge** el recurso de protección interpuesto a favor de doña Alejandra Andrea Contreras Ramírez, disponiéndose que la recurrida deberá formalizar la práctica profesional de la actora, reconociendo el tiempo efectivamente ejecutado, permitiendo su reincorporación a la misma por los seis días pendientes.



Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Adelita Ravanales.

Rol N° 8.944-2022.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E., Sra. María Teresa Letelier R. No firma el Ministro Sr. Muñoz y la Ministra Sra. Letelier, no obstante haber ambos concurrido al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal el primero y encontrarse comisión de servicios la segunda. Santiago, 30 de septiembre de 2022.



En Santiago, a treinta de septiembre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

